Regional Human Development Report 2025
Background Paper

55

UNDP LAC
WORKING PAPER SERIES

Desafíos de la incorporación política, estabilidad y resiliencia democrática en América Latina

Verónica Pérez-Bentancur
Rafael Piñeiro-Rodríguez
Fernando Rosenblatt

www.undp.org/latin-america

Autores

Verónica Pérez-Bentancur
veronica.perez@cienciassociales.edu.uy
Universidad de la República

Rafael Piñeiro-Rodríguez
rafael.pineiro@ucu.edu.uy
Universidad Católica del Uruguay

Fernando Rosenblatt
fernando.rosenblatt@manchester.ac.uk
Universidad de Manchester

Aviso:
Las opiniones y recomendaciones presentadas en este documento son de los autores y no representan necesariamente la posición oficial del PNUD. Este documento recoge aportes empíricos y conceptuales derivados del proyecto de investigación "Incorporación política, conflicto y democracia en América Latina", Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay (FCE_1_2021_1_166798).

Cita recomendada: **Pérez-Betancur, V. *et al.*** (2025). Desafíos de la incorporación política, estabilidad y resiliencia democrática en América Latina. UNDP LAC Working Paper Series N°. 55

Resumen ejecutivo

A pesar de las mejoras en la inclusión social, los avances en políticas de reconocimiento y en el desarrollo humano en América Latina desde el inicio del siglo XXI, muchas de las democracias de la región han experimentado crisis de legitimidad. Esto se manifiesta en diferentes formas de protesta, a menudo masivas e inorgánicas, y en el éxito electoral de *outsiders* que movilizan al electorado sobre la base del descontento contra las elites políticas establecidas.

Las democracias pueden entenderse como formas de administrar conflictos, y, como tales, requieren el consentimiento permanente de la ciudadanía y de los actores sociales. En la actualidad, las sociedades son más heterogéneas y fragmentadas. En estos contextos, los agentes políticos (partidos y otras organizaciones tradicionales de alcance nacional) enfrentan serios desafíos para incorporar la diversidad de intereses y demandas sociales, y, por lo tanto, para armonizar los intereses de diferentes sectores.

Este documento argumenta que las democracias resilientes deben desarrollar de manera continua la capacidad de incorporar a todos los sectores relevantes de la sociedad a la política. Los partidos políticos y sus vínculos con actores sociales organizados desempeñan un rol clave en este proceso. El documento sostiene que solo la incorporación política puede reproducir la legitimidad necesaria para fortalecer la resiliencia del orden democrático. El texto desarrolla un concepto de incorporación política y propone un índice para medirlo. Además, postula que tal incorporación representa la capacidad de los sistemas políticos para canalizar constantemente las demandas y los intereses de diversos sectores –en particular marginados o excluidos– que representan intereses y demandas en torno a conflictos salientes de la sociedad. En este sentido, cuando las demandas de los sectores populares alcanzan cierto nivel de activación política y se vuelven significativas, el desafío para las democracias es contar con agentes que las representen en el proceso político a lo largo del tiempo.

El desempeño de los países de América Latina en el índice de incorporación política muestra, en general, bajos niveles en la región. Esto responde tanto a un nivel bajo de organización de los sectores sociales vinculados a conflictos relevantes, como de conexión de los agentes políticos (partidos o líderes políticos) con estas organizaciones. Salvo excepciones, como Nicaragua y Venezuela, los problemas de incorporación política en la región no parecen estar relacionados con las garantías para el ejercicio del derecho de asociación (tanto para formar partidos como organizaciones para participar en elecciones) y del proceso político en general.

En un contexto de incorporación política relativamente baja, existe una variación significativa entre los países de la región. Uruguay y Brasil destacan sobre el resto, con los puntajes más altos en el índice. Bolivia y Argentina se ubican en tercer y cuarto lugar, ligeramente por encima de un grupo de países con resultados más modestos (México, Chile, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y República Dominicana). Finalmente, el documento ilustra el argumento teórico mediante el análisis en profundidad de dos casos que muestran valores muy diferentes en el índice: Uruguay, como caso de incorporación política, y Chile, como un tipo disminuido de incorporación.

Introducción

¿Por qué la ampliación de la inclusión y la mejora del desarrollo humano no impidieron el estallido de una grave crisis de legitimidad en las democracias latinoamericanas en la última década? Desde principios del siglo XXI hasta la pandemia de la COVID-19, América Latina experimentó un proceso de expansión de las políticas sociales que contribuyó, aunque en distinto grado, a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento del desarrollo humano en toda la región (Arza *et al.* 2022; Benza y Kessler, 2020; Garay, 2016; Kapiszewski *et al.*, 2021a; UNDP, 2010 y UNDP, 2024).

A pesar de la implementación de diversas políticas sociales y del reconocimiento de derechos dirigidos a sectores anteriormente excluidos y marginados (trabajadores informales, pueblos originarios, disidencias sexuales, mujeres), la región experimentó crisis graves de legitimidad que expresaban malestar político (Silva, 2017). Esto se manifestó en diferentes formas de protesta y en el éxito electoral de *outsiders* que movilizaron al electorado sobre la base del descontento contra las elites políticas establecidas. En la última década estallaron protestas intensas en varios países de la región, por ejemplo, en Brasil (Nunes y Melo, 2017), Ecuador (Olivares y Medina, 2020; Ramírez Gallegos, 2020), Colombia (Abitbol, 2019), en Chile (Castiglioni, 2019; Palacios-Valladares, 2020; Somma *et al.*, 2020; Somma *et al.*, 2021), en Guatemala (Schwartz, 2024) y en Panamá (Nevache, 2024). Esta ola de movilizaciones callejeras, en algunos casos inorgánicas, es la expresión de una crisis de legitimidad.

La expansión de las políticas sociales no ha proporcionado resiliencia democrática para enfrentar los cambios estructurales en curso e introducir a la región en una trayectoria de desarrollo sostenible. Las políticas sociales inclusivas, el reconocimiento formal de derechos y aun la institucionalización de formas segmentadas de representación de intereses y de acceso a las instituciones de gobierno no implican de forma automática el aumento de la legitimidad del sistema político y del proceso político en su conjunto. Este proceso de avances de las políticas sociales, de reconocimiento de derechos y de acceso, que suele denominarse "proceso de inclusión" (Kapiszewski *et al.*, 2021b), no ha supuesto necesariamente la incorporación política de los sectores que se perciben como excluidos del sistema político.

El acceso a la toma de decisiones, la distribución de recursos materiales y el reconocimiento de derechos, orientado a sectores previamente excluidos, ha seguido una lógica segmentada. Esta característica, sin agentes capaces de agregar demandas e intereses para representar a estos sectores en el proceso político general, impide que la ciudadanía conciba el proceso político en su conjunto como legítimo. La debilidad de agentes políticos y sociales (partidos y organizaciones sociales) con capacidad de agregar demandas segmentadas hace que los sistemas políticos, a pesar de haber avanzado en procesos de inclusión, sigan siendo poco resilientes frente a *shocks* externos que afecten los niveles de vida de la población de manera coyuntural o estructural.

La resiliencia de las democracias es producto del grado legitimidad de sus instituciones (procesos y organizaciones). Los sistemas políticos altamente institucionalizados, es decir, dotados de instituciones estables, legítimas y capaces de agregar intereses diversos, pueden atravesar crisis de eficacia sin arriesgar su legitimidad, lo que los vuelve más resilientes. En sociedades desiguales, la institucionalización implica esencialmente la incorporación al proceso político de los sectores sociales y económicos desfavorecidos. Por lo tanto, la incorporación política supone el ejercicio colectivo de los derechos políticos a través de organizaciones sociales y partidos que aseguren a los sectores desfavorecidos incidencia en la política.

¿Qué papel juegan los partidos políticos en la canalización de las demandas e intereses de los sectores desfavorecidos en el siglo XXI? La incorporación requiere que estos grupos cuenten con actores sociales organizados con vínculos permanentes con los partidos políticos. La incorporación implica una construcción política permanente más que un mero reconocimiento formal, el acceso a derechos o incluso la provisión de políticas sociales. Para que los intereses de los sectores desfavorecidos estén incorporados sistemáticamente en la política, son necesarias organizaciones sociales y partidos políticos que actúen como vehículos de canalización, agregación y transmisión de intereses, ideas y valores al proceso político.

Este trabajo discute el concepto de incorporación política con un enfoque especial en el contexto latinoamericano. Para ello, se esboza una conceptualización de incorporación política como mecanismo crucial para construir y reproducir democracias resilientes. A partir de esta conceptualización, se desarrolla una tipología y un índice de incorporación política que sirven para analizar y evaluar los riesgos y desafíos al orden democrático. Finalmente, se ilustra el concepto, describiendo instancias de incorporación política y formas disminuidas en dos casos sudamericanos seleccionados que presentan muy diferentes valores en el índice de incorporación política: Chile y Uruguay.

1. Incorporación política, legitimidad y resiliencia

La participación individual, en particular la colectiva, le otorga poder de agencia a las personas sobres sus propias vidas y la de sus comunidades (UNDP, 1993). La participación les permite a las personas acceder a un mayor rango de oportunidades, especialmente a través de su participación organizada. En este sentido, la participación es esencial para el desarrollo humano visto en términos individuales, ya que aumenta la influencia y la capacidad de control de las personas sobre sus vidas y sus comunidades al empoderarlas. En términos comunitarios, cuando la participación es un proceso continuo, las comunidades aumentan su resiliencia porque otorgan legitimidad a los procesos sociales y políticos. En este contexto, las crisis de desempeño no se transforman en crisis de legitimidad que cuestionan las bases organizativas de la sociedad. Cuando las cosas van mal, la participación como un proceso permite atribuir correctamente responsabilidades y resolver y responder a los problemas como una comunidad.

La institucionalización de un sistema político refiere a la capacidad de adaptación de las organizaciones o los procedimientos a contextos que los desafían (Huntington, 1968). Los sistemas políticos institucionalizados son los que logran estabilidad y resiliencia como consecuencia de su capacidad para enfrentar disrupciones producto de la emergencia de nuevos intereses y demandas desde la sociedad. Como sostienen Piñeiro Rodríguez y Rosenblatt (2020), en sociedades en desarrollo, la institucionalización es un proceso que nunca finaliza y que está determinado por la habilidad de los partidos y organizaciones sociales de incorporar nuevas demandas e intereses de manera permanente. Esta incorporación puede ocurrir a través de las instituciones y organizaciones establecidas o a través de nuevas organizaciones.

La institucionalización del sistema político, entendida como la capacidad de incorporar sectores marginados sin generar inestabilidad, no es un resultado natural de la evolución de los sistemas políticos (Huntington, 1968; Piñeiro Rodríguez y Rosenblatt, 2020). Algunos sistemas políticos pueden no alcanzar nunca un nivel sustancial de institucionalización, mientras que otros pueden perderlo después de haberlo adquirido. En algunos escenarios, no existe un vínculo entre organizaciones sociales y partidos. Incluso, en casos más extremos, los sectores desfavorecidos no cuentan con organizaciones (sociales o políticas) capaces de canalizar demandas hacia la política institucional. La ausencia de conexión entre organizaciones sociales y partidos, y la falta de organización de los sectores populares, o la ausencia de ambas carencias, aleja a los sectores populares del proceso político y eventualmente, engendra movilizaciones sociales inorgánicas y crisis de legitimidad.

Los procesos de desinstitucionalización, asociados a la pérdida de capacidad de los sistemas políticos para incorporar a los sectores populares, se explican por factores estructurales e institucionales. En sociedades en desarrollo y desiguales, los sectores populares enfrentan serios problemas de acción colectiva para generar agentes con capacidad de incorporar sus preferencias al proceso político. La desigualdad económica y la concentración de la riqueza son factores estructurales que tienen impacto directo sobre la representación democrática (Bartels, 2016; Gilens, 2012; Luna, 2014; Przeworski, 2010; Schlozman *et al.*, 2018; Taylor-Robinson, 2010; Winters, 2011). Los diseños institucionales también afectan la capacidad de los sectores populares para desarrollar acción colectiva, particularmente en términos de construir organizaciones con capacidad de influir en el proceso político. Por ejemplo, varios autores han señalado que los diseños institucionales pueden obstaculizar o desalentar la sindicalización (Collier y Collier, 1991; Collier, 2018; Silva, 2017).

Las reformas promercado de los años noventa supusieron la desintegración de la movilización de clase, el surgimiento de formas nuevas y heterogéneas de movilización no vinculadas a partidos de base obrera (por ejemplo, la movilización de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, los sectores informales en el Movimiento Piquetero en Argentina o el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil) y la movilización desestructurada de la ciudadanía desencadenada por líderes *outsiders* y carismáticos (Collier y Handlin, 2009; Etchemendy, 2011; Roberts, 1998, 2002; Rossi, 2017; Yashar, 2005).

Los cambios en la economía política producto de las reformas promercado dieron paso a una sociedad civil más diversa y fragmentada. Los sindicatos y los partidos de base obrera fueron desafiados como agentes principales de representación de los sectores populares (Collier y Handlin, 2009; Conaghan, 2018; Handlin, 2013; Rossi y Silva, 2018). De hecho, la coyuntura de las reformas económicas de los años noventa incluso fue precedida por (o, en el caso de Chile, coincidió con) un proceso de desincorporación formal de los sectores populares bajo regímenes autoritarios.

En este contexto, surgieron nuevos agentes de intermediación, como las organizaciones comunitarias, las ONG y los nuevos movimientos sociales de trabajadores informales y pueblos indígenas, entre otros. Estos agentes caracterizan un nuevo modelo de intermediación de intereses (Rossi y Silva, 2018), que Collier y Handlin (2009) denominan "redes asociativas", en contraposición al "eje sindicato-partido".

Las políticas de inclusión, como las que se produjeron en América Latina a partir de los dos mil, no necesariamente tienen un efecto inequívoco sobre la incorporación política de los sectores populares. Una política pública que incluye a un sector previamente excluido (en términos de acceso, recursos o reconocimiento de derechos) puede, de hecho, impedir o debilitar su organización política y su capacidad para la acción colectiva. Las políticas inclusivas pueden ser una herramienta estratégica en manos de los gobiernos para cooptar y dividir a los sectores populares y su capacidad de convertirse en un actor político que desafíe al *statu quo* (Bates, 1981; Rossi y Silva, 2018).

La fragmentación y la creciente heterogeneidad de demandas y actores de diferentes sectores de la población, junto con las respuestas igualmente segmentadas de inclusión de parte del Estado, no producen *per se* una incorporación al proceso político en su conjunto. Sin actores sociales y políticos con capacidad para agregar a esas demandas y a esos sectores, la inclusión no se transforma en incorporación. La inclusión segmentada no genera legitimidad al sistema político en su conjunto, incluso entre aquellos que son reconocidos y que logran acceso a áreas específicas de política o reconocimiento de sus derechos.

Las formas segmentadas de representación de los intereses populares no son equivalentes funcionales de la agregación de intereses y demandas que producen las organizaciones sociales de alcance nacional y, en particular, los partidos. Estas nuevas formas de intermediación identificadas por la literatura (*cf.* Collier y Handlin, 2009) no pueden incorporar a los sectores populares al proceso político general (es decir, solo logran incluirlos para temas puntuales o en territorios localizados) y concomitantemente no pueden generar legitimidad al sistema político. Por lo tanto, es crucial entender las consecuencias de la fragmentación y de la pluralización de los intereses de los sectores populares en términos de incorporación política. En particular, es relevante analizar las diferentes respuestas (exitosas y fallidas) de los partidos y las organizaciones sociales para agregar demandas y así incorporar a la ciudadanía en el proceso político general. A pesar de los cambios estructurales observados en la economía política de América Latina que afectaron la capacidad de los partidos para mantenerse como agentes de representación, algunos conservaron esta capacidad y han sido capaces de agregar las nuevas demandas e intereses que surgieron de manera fragmentada.

La incorporación política de los sectores populares es la capacidad de canalizar permanentemente demandas e intereses de grupos sustantivos en el sistema político. Cuando las demandas de los sectores populares adquieren algún nivel de activación política y se vuelven significativas para el sistema político, el desafío para las democracias es contar con agentes que representen y agreguen esas demandas e intereses para incorporarlos en el proceso político a largo plazo.

Redefinición del concepto de incorporación política

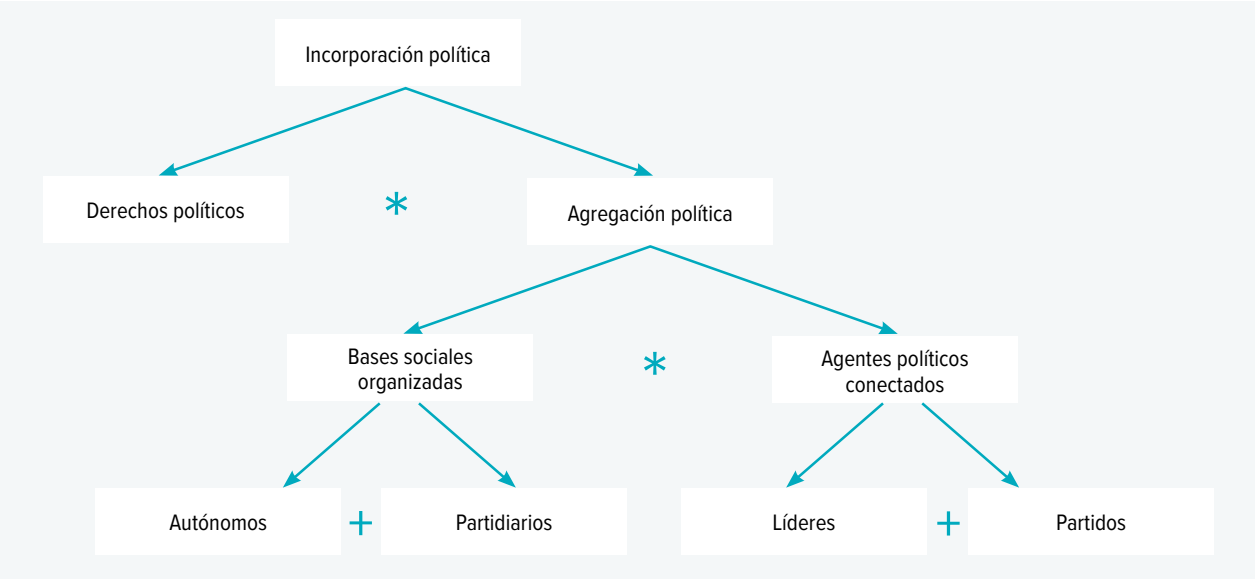
La descripción sistemática de los procesos de incorporación política en los diferentes países de América Latina requiere el desarrollo de un concepto de incorporación que permita observar y medir este fenómeno. En este trabajo, proponemos un concepto de incorporación política que tiene dos dimensiones: la existencia de derechos políticos (componente formal) y la agregación política (componente sustantivo); ambos son atributos necesarios del concepto. El componente formal refiere a la existencia de derechos políticos que garantizan a los ciudadanos, de manera individual, la capacidad de actuar colectivamente en el proceso de toma de decisiones. El componente sustantivo refiere a la existencia efectiva de sectores sociales organizados y partidos o líderes políticos con capacidad para agregar y canalizar las demandas de esos sectores.

En nuestra conceptualización, los actores sociales organizados pueden ser autónomos u organizados desde arriba por un partido. Los agentes políticos con capacidad de agregación pueden ser partidos o líderes vinculados con esos sectores (ver figura 1). Tanto la existencia de actores sociales organizados como de agentes políticos con capacidad de agregación son atributos necesarios para la presencia del componente sustantivo de la incorporación.

En sociedades con sectores populares muy heterogéneos (por ejemplo, trabajadores informales y formales, de zonas rurales y urbanas), los partidos se enfrentan al reto de desarrollar la capacidad para agregar, priorizar u ordenar sus diferentes demandas. Sin embargo, no todos los partidos o líderes tienen vínculos que les permitan alcanzar estos objetivos. La clave para poder agregar preferencias

de actores sociales diversos es tener conexiones orgánicas de largo plazo con sus sectores sociales, a través de las organizaciones que los articulan. Esto es aún más desafiante para los partidos cuando no existen organizaciones sociales que agreguen a nivel nacional o sectorial las preferencias de esos grupos.

Figura 1. Concepto de incorporación política



Fuente: Elaboración propia.

A partir de este concepto de incorporación política, desarrollamos una tipología de subtipos disminuidos (Collier y Levitsky, 1997). El principal desafío para la incorporación política reside en la capacidad del sistema para agregar las demandas sociales. Como se señaló anteriormente, la agregación política requiere la presencia de dos dimensiones: sectores sociales organizados y agentes políticos vinculados a estos electorados. La ausencia de una de estas dos dimensiones da lugar a un subtipo disminuido de incorporación (ver figura 2).

Figura 2. Tipología de subtipos disminuidos de incorporación política

		Sectores sociales organizados	
		No	Sí
Agentes políticos conectados	Sí	Incorporación desenraizada	Incorporación
	No	No incorporación	Incorporación desconectada

Fuente: Elaboración propia.

Los agentes políticos (partidos o líderes) que tienen vínculos con organizaciones sociales que existen formalmente, pero que carecen de capacidad para organizar las demandas de sus bases, constituyen el subtipo disminuido de incorporación desenraizada. Aunque en estos casos existen vínculos entre partidos o dirigentes y organizaciones sociales, la debilidad de estas últimas impide la incorporación política. Esta debilidad impide la materialización de un vínculo entre el líder o partido político con el electorado, a través de actores sociales organizados. Cuando existen actores sociales que pueden organizar las demandas de los sectores populares, pero los agentes políticos (partidos o líderes) no tienen conexión o vínculos con ellos, es una incorporación desconectada. Finalmente, cuando no existen ni sectores sociales organizados ni agentes políticos conectados, no hay incorporación.

2. Índice de incorporación política

Para medir el concepto de incorporación política en la actualidad, desarrollamos un índice a partir de una batería de indicadores para cada una de las dimensiones constitutivas del concepto. El valor para cada caso es el resultado de la combinación de dos fuentes de datos. Para los indicadores asociados a la dimensión sustantiva del concepto, se utilizan datos que surgen de una consulta a expertos y expertas sobre la política y la sociedad en cada país de América Latina. Para los indicadores asociados a la dimensión formal del concepto de incorporación, se utilizan datos de Varieties of Democracy (Coppedge *et al.*, 2024b).

Para determinar la existencia y el nivel en que están garantizados los derechos políticos (dimensión formal de incorporación política) en un país, en particular, el funcionamiento de los que aseguran la capacidad de la ciudadanía de actuar colectivamente en el proceso de toma de decisiones, utilizamos el índice *Freedom of association thick index*[1] (v2x_frassoc_thick) de V-Dem (Coppedge *et al.*, 2024a). Este indica en qué medida los partidos, incluidos los de la oposición, pueden formarse y participar en las elecciones, y en qué medida las organizaciones de la sociedad civil pueden constituirse y actuar libremente. El índice varía entre 0 y 1, donde 0 indica ausencia de derechos políticos que permiten a la ciudanía actuar colectivamente; y 1, plena existencia de estos derechos.

La dimensión de agregación política tiene dos componentes: bases sociales organizadas y agentes políticos conectados. Para observar el nivel de agregación política, se consultó a las personas expertas sobre la presencia o no de organizaciones sociales formales o informales que representan diferentes sectores populares significativos en las sociedades actuales: trabajadores formales e informales, mujeres, estudiantes, ambientalistas, diversidades sexuales y otros sectores organizados de conflictos salientes en cada país[2] (campesinos o personas sin tierra, indígenas, consumidores, personas afro, personas sin techo/con problemas de acceso a la vivienda, jubilados, u otros)[3].

Asimismo, en cada sector donde los expertos identificaron la presencia de organizaciones sociales, se consultó acerca del nivel de representatividad que estas ejercen[4]. El valor del nivel para el componente "bases sociales organizadas" en un país es el promedio de presencia o ausencia (1 presencia, 0 ausencia) de organizaciones sociales en los sectores relevantes, ponderado en cada sector por su nivel de representación (se pondera por 0,20 cuando es nada representativa, por 0,40 cuando es poco representativa, por 0,60 cuando es algo representativa, por 0,80 cuando es bastante representativa, y por 1,0 cuando es muy representativa). De esta manera, obtenemos un valor que varía entre 0 y 1, siendo 0 ausencia de sectores sociales organizados y 1 cuando todos los sectores sociales relevantes tienen organizaciones sociales representativas.

Si un país presenta organizaciones en todos los sectores, pero estas son poco o nada representativas, la ponderación hará que tenga valores bajos en este componente (sectores sociales organizados) de agregación política. Valores bajos en esta dimensión no supone que en algunos sectores puedan existir

1 Índice denso de libertad de asociación (traducción literal).

2 ¿Cuáles son los principales conflictos que existen en el país sobre el que usted está respondiendo? Entendemos por conflicto a divisiones de largo plazo (no coyunturales) que enfrentan valores o intereses contrapuestos en la sociedad. Estos conflictos no necesariamente tienen que estar representados en la arena política o estructurados a partir de organizaciones o movimientos sociales y políticos (seleccione a partir de la siguiente lista y marque tantos como sea necesario). Opciones de respuesta: Capital/trabajo; Regional (entre zonas o regiones del país); Religioso; Racial; Étnico; Ambiental; Otro/s (especifique).

3 ¿Cuáles de los siguientes sectores están agrupados en organizaciones más o menos formales en el país sobre el que usted está respondiendo?

4 Para cada sector social para los que respondió que sí existe organización, le pedimos que nos indique ¿Qué tan representativas son esas organizaciones de las personas de ese ese sector social? Opciones de respuesta: Nada representativa; Poco representativa; Algo representativa; Bastante representativa; Muy representativa.

organizaciones sociales capaces de conducir acciones colectivas relevantes. Tampoco supone que, ante situaciones coyunturales organizaciones poco representativas puedan eventualmente liderar protestas (este parece ser el caso de las protestas de 2023 en Panamá o en Guatemala). Valores bajos en esta dimensión indican que la estructuración organizada de los diferentes sectores relevantes de la sociedad es débil para procesar de manera continua su incorporación en la política.

Para observar el nivel de conexión de los agentes políticos (partidos o líderes) con los sectores sociales organizados, se considera el promedio de la existencia o no de vínculo (0 si no existe vínculo, 1 si existe vínculo) con cada uno de los sectores que deberían estar organizados en ese país. Si el sector no está organizado, tiene valor 0 en conexión, dado que si no existe organización en ese sector social no hay forma de establecer un vínculo orgánico. Si el sector social está organizado, el nivel de conexión de los agentes políticos puede adquirir valor 0 o 1, dependiendo de si existe vínculo o no con la o las organizaciones de ese sector social. De esta manera, se obtiene un valor que varía entre 0 y 1, siendo 0 ausencia de vínculo entre agentes políticos (líderes o partidos) y sectores sociales organizados, y 1, cuando los agentes políticos tienen vínculos con todos los sectores sociales relevantes en ese país.

El nivel de agregación política de un país se define como el valor mínimo entre los valores del nivel de organización de los sectores sociales y del nivel de vinculación de los agentes políticos. Utilizamos el mínimo como forma de agregación de estos dos valores, dado que en nuestro concepto estas dos dimensiones (sectores sociales organizados y agentes políticos conectados) son necesarias. Es decir, no existe posibilidad de compensación o sustitución entre esas dos dimensiones. El valor que adquiere un país en agregación política variará entre 0 y 1, siendo valores cercanos a 0 indicador de ausencia de agregación (por ausencia de sectores sociales organizados o por ausencia de vínculos de los agentes políticos con los sectores sociales organizados) y valores cercanos a 1, cuando existe vinculación entre agentes políticos con todos los sectores sociales relevantes.

El valor de nuestro índice de incorporación política para cada país es el valor mínimo de los dos componentes del concepto (derechos políticos y agregación política). El mínimo como regla de agregación en este caso supone que tanto derechos políticos como agregación política son condiciones necesarias para la incorporación. De esta forma, países con niveles altos de derechos políticos, pero bajos en agregación tendrán valores bajos en el índice de incorporación. Lo mismo sucederá con países que tengan niveles bajos de derechos políticos y altos de agregación. El índice varía entre 0 y 1, donde 0 es ausencia de incorporación y 1 incorporación plena.

El desempeño de los países de América Latina en este índice muestra, en general, bajos niveles de incorporación política en la región. Esto responde tanto a un nivel bajo de organización de los sectores sociales asociados a conflictos relevantes como de conexión de los agentes políticos con estas organizaciones (ver tabla 1). Por lo tanto, los bajos niveles de agregación política que existen en los sistemas políticos de América Latina obedecen a debilidades en estas dos dimensiones. Los problemas de incorporación política en la región no parecen estar asociados al ejercicio del derecho de asociación, tanto en términos del ejercicio de derechos para formar partidos y participar en elecciones como para formar organizaciones de la sociedad y participar del proceso político (a excepción de Nicaragua y Venezuela). Varios países con niveles altos en derechos políticos registran niveles bajos en agregación (por ejemplo, Costa Rica y Panamá).

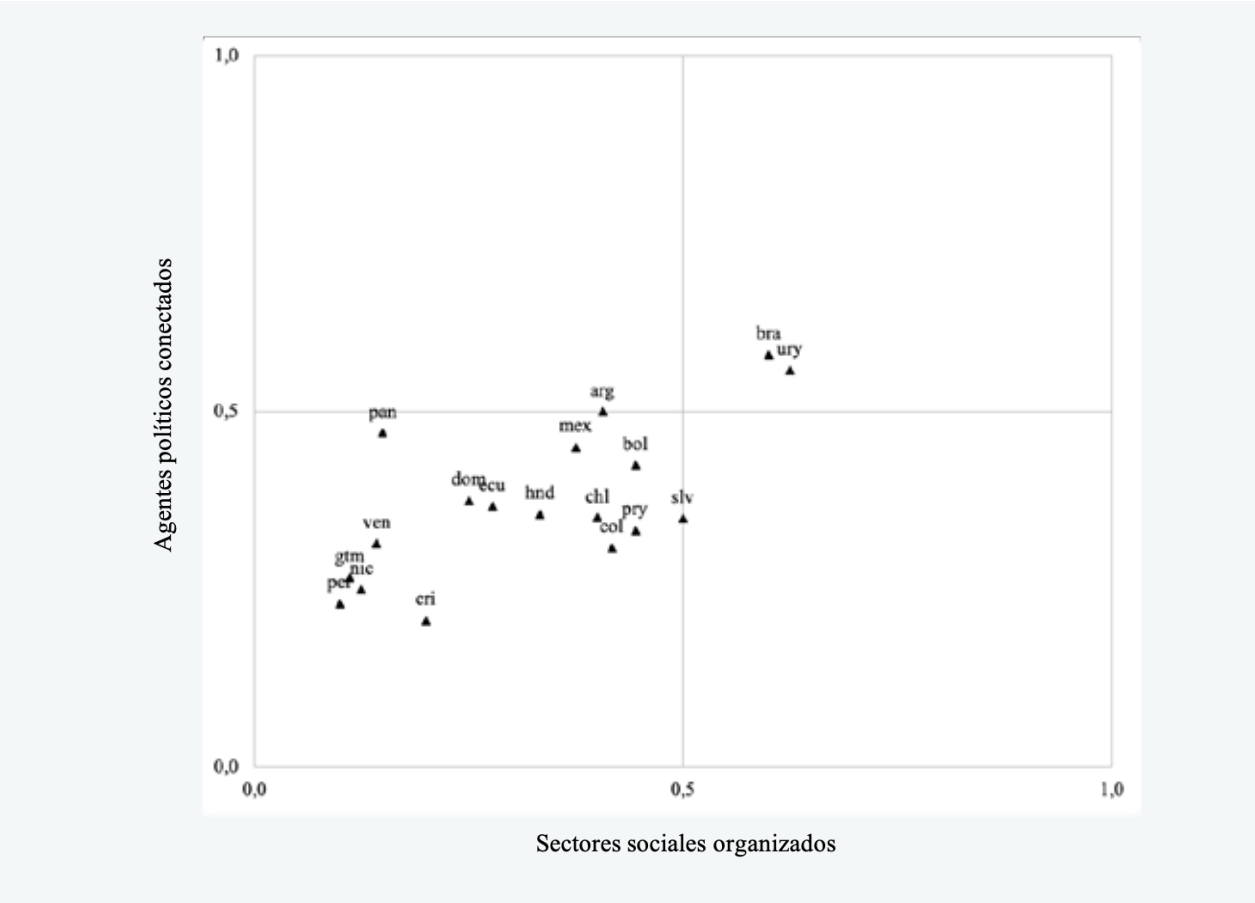
Tabla 1. Índice de incorporación política

País	Sectores sociales organizados	Agentes políticos conectados	Agregación política	Derechos políticos	Índice de incorporación política
Brasil	0,58	0,60	0,58	0,912	0,58
Uruguay	0,56	0,63	0,56	0,896	0,56
Bolivia	0,43	0,44	0,43	0,773	0,43
Argentina	0,50	0,41	0,41	0,898	0,41
México	0,45	0,38	0,38	0,722	0,38
Chile	0,35	0,40	0,35	0,873	0,35
El Salvador	0,35	0,50	0,35	0,702	0,35
Honduras	0,36	0,33	0,33	0,855	0,33
Paraguay	0,33	0,44	0,33	0,804	0,33
Colombia	0,31	0,42	0,31	0,901	0,31
Ecuador	0,37	0,28	0,28	0,774	0,28
República Dominicana	0,38	0,25	0,25	0,88	0,25
Costa Rica	0,21	0,20	0,20	0,918	0,20
Panamá	0,47	0,15	0,15	0,88	0,15
Venezuela	0,31	0,14	0,14	0,272	0,14
Nicaragua	0,25	0,13	0,13	0,139	0,13
Guatemala	0,27	0,11	0,11	0,698	0,11
Perú	0,23	0,10	0,10	0,811	0,10

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de expertos y V-Dem para derechos políticos.

En un contexto de niveles relativamente bajos de incorporación política existe una variación significativa entre los países de la región. Uruguay y Brasil destacan sobre el resto, ya que presentan los niveles más altos de América Latina, tanto en el índice de incorporación política como en las dos dimensiones asociadas a agregación política dentro del índice (sectores sociales organizados y agentes políticos conectados). Bolivia y Argentina se ubican en tercer y cuarto lugar un poco por encima de un grupo de países con niveles bajos en el índice (México, Chile, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y República Dominicana). Finalmente, con niveles muy bajos de incorporación política se encuentran Costa Rica, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Perú.

Figura 3. Niveles de organización de sectores sociales y de conexión de agentes políticos



Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de expertos.

Todos los países de América Latina tienen niveles bajos de agregación política porque presentan niveles bajos en las dos dimensiones que conforman este componente de incorporación política (agentes políticos conectados y sectores sociales organizados). Sin embargo, algunos países muestran disparidades más grandes entre el nivel de organización de los sectores sociales y el de conexión de sus agentes políticos, por ejemplo, El Salvador y Panamá (ver figura 3 y tabla 1). En una de las dimensiones de agregación política, estos países tienen niveles relativamente altos, mientras que presentan niveles bajos en la otra.

Estos casos se acercan a los subtipos disminuidos de incorporación política (ver figura 2). En el caso de Panamá, los niveles relativamente altos de conexión de los agentes políticos contrastan con sectores sociales con bajo nivel de organización. Las organizaciones vinculadas a los partidos tienen bajos niveles de representatividad. Por eso, Panamá se acerca al subtipo de incorporación desenraizada. Por el contrario, en El Salvador, existen niveles altos de organización de sectores sociales (similares a los de Uruguay), pero su conexión con agentes políticos es débil. Esto se asemeja al subtipo de incorporación desconectada.

3. Incorporación política en dos casos de América Latina

En esta sección discutimos dos casos para conocer con mayor detalle las características que adopta la incorporación política y sus subtipos. Para esto, seleccionamos dos casos: Chile y Uruguay. En la literatura comparada, estos países suelen ser considerados democracias consolidadas (Mainwaring, 2018; Mainwaring y Scully, 2010) que han logrado avances sustantivos en la reducción de la pobreza y aumento del bienestar (Benza y Kessler, 2020; Pribble, 2013; UNDP, 2024). Sin embargo, han experimentado trayectorias dramáticamente diferentes en la última década en relación con sus niveles de estabilidad política, de confianza en los partidos y de legitimidad del proceso político (Piñeiro Rodríguez y Rosenblatt, 2020). Mientras que Uruguay ha exhibido niveles estables de legitimidad de sus instituciones políticas, Chile experimenta desde hace más de una década ciclos de creciente agitación social y violencia que han desafiado el orden político (Donoso y Von Bülow, 2017; Medel *et al.*, 2023; Nocetto *et al.*, 2024; Somma *et al.*, 2021).

Chile: incorporación débil y desconectada

Chile ha sido considerado como el ejemplo paradigmático de la doble transición a la democracia y a las reformas de mercado. El país fue señalado en la literatura como un caso que logró la estabilidad democrática y el crecimiento económico en una región caracterizada por la inestabilidad y el malestar social (Mainwaring y Scully, 2010; Weyland, 1997). Además, su sistema de partidos se consideraba un sistema de partidos institucionalizado (Mainwaring, 2018).

Sin embargo, varios autores han destacado la naturaleza cada vez más osificada y desarraigada del sistema de partidos y de sus organizaciones partidarias de Chile (Luna *et al.*, 2021; Luna y Rosenblatt, 2012; Luna y Altman, 2011; Piñeiro Rodríguez y Rosenblatt, 2020; Roberts, 1998; Rosenblatt, 2018). La confianza en los partidos y la identificación con los partidos nunca fueron excepcionalmente altas en Chile, pero, en especial desde principios de la década de los 2000, los partidos establecidos se fueron desvinculando gradualmente de la sociedad (Luna y Altman, 2011; Luna y Rosenblatt, 2012; Meléndez y Rovira Kaltwasser, 2019; PNUD, 2024; Rosenblatt, 2018).

A lo largo de los últimos veinte años, el sistema de partidos chileno fue perdiendo progresivamente tanto su estabilidad como su capacidad para incorporar las demandas de la sociedad. Este proceso es paralelo al debilitamiento progresivo de las organizaciones partidarias. Rosenblatt (2018) describe cómo los principales partidos políticos chilenos perdieron su relevancia social. En los últimos veinte años, las grandes escisiones y salidas de los partidos se han hecho más frecuentes, así como la irrupción de nuevos liderazgos con éxito electoral bajo nuevas etiquetas.

Las movilizaciones y protestas masivas han sido cada vez más comunes desde 2006, cuando las protestas estudiantiles del movimiento Pingüino estallaron por primera vez en Santiago (Bidegain Ponte, 2015; Somma, 2012). Medel *et al.* (2023) muestran cómo la movilización social no relacionada con el clivaje tradicional capital-trabajo y los derechos humanos (es decir, las movilizaciones asociadas a reclamos estudiantiles y de la diversidad sexual) no promovió la participación electoral ni desarrolló vínculos con la política institucional y los partidos establecidos.

El estallido social que se inició en octubre de 2019 fue la última y más intensa manifestación del divorcio entre la sociedad y los partidos políticos en Chile. Diversos trabajos señalaron que el descontento que se manifestó abruptamente en 2019 fue creciendo paulatinamente en el interior

de la sociedad chilena (Castiglioni y Rovira Kaltwasser, 2016; Luna y Rosenblatt, 2017). Durante este proceso, e incluso después del estallido producto del malestar social, ningún partido político u organización de la sociedad civil fue capaz de agregar e incorporar las demandas que emergían desde distintos sectores sociales (por ejemplo, el movimiento estudiantil o el movimiento sindical) en la arena política y en el sistema de partidos. Los partidos estuvieron completamente ausentes de las movilizaciones callejeras durante la década que duraron las protestas.

A diferencia de lo ocurrido con otros estallidos sociales en la región que fueron liderados por organizaciones sociales y partidos (como el de Ecuador en 2019), el de Chile nació y se desarrolló sin organizaciones sociales o políticas que lo lideraran. De hecho, uno de los principales rasgos de este malestar social fue la ausencia de una o varias organizaciones que pudieran canalizar políticamente las demandas de la población. Las movilizaciones no produjeron ni fueron dirigidas por un líder político que galvanizara los intereses y demandas que estaban presentes en las protestas callejeras. Por parte de movimientos establecidos, hubo algunos intentos de construir una coalición de organizaciones sociales liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sociales para liderar y canalizar la protesta. Esta iniciativa, denominada Unidad Social, fracasó en convertirse en la representación organizada de los manifestantes y de la gran variedad de demandas que se expresaron en las calles.

La erosión de la capacidad de canalizar demandas se observa en el caso de la vinculación entre el Partido Socialista de Chile y la CUT. Si bien existe un vínculo entre ambas instancias, a través de la doble militancia de algunos dirigentes importantes, la debilidad de la CUT como agente de los trabajadores chilenos, especialmente en el sector privado, impide la incorporación política del sector laboral del país (Medel Sierralta, 2021 y 2017).

El análisis del movimiento estudiantil y del movimiento mapuche en Chile, realizado por Somma y Medel (2017) y Bidegain (2015), destaca que ambos sectores populares estaban organizados, pero carecían de vínculos con los partidos políticos. Los autores afirman que esta desconexión engendró una acción colectiva no institucionalizada y un ciclo de política contenciosa. Estos autores describen al caso chileno en torno a esos dos ejes de conflicto (indígena y estudiantil) como un caso que se ajusta a nuestro subtipo disminuido de incorporación desconectada (sectores organizados sin agentes partidarios conectados).

El sistema político chileno enfrenta un doble desafío en términos de incorporación política. Por un lado, las organizaciones sociales enfrentan dificultades para canalizar y agregar el descontento asociado a diferentes conflictos sociales. Por otro, los partidos no logran generar vínculos y conexiones con esas organizaciones. De esta forma, se produce un escenario donde la ciudadanía experimenta una percepción de "baja capacidad de agencia colectiva para incidir en el rumbo del país" (PNUD, 2024, p. 108).

Uruguay: un caso de incorporación política

Uruguay, al igual que Chile, es considerado un caso exitoso de doble transición a la democracia y a la economía de mercado (Lanzaro, 2000; Roberts, 2014). Sin embargo, a diferencia de Chile, Uruguay mantiene un sistema de partidos institucionalizado y sus organizaciones partidarias tienen raíces en la sociedad, así como se mantienen niveles relativamente altos de identificación partidaria (Piñeiro Rodríguez y Rosenblatt, 2020; Pérez Bentancur *et al.*, 2020; Rosenblatt, 2018; Mainwaring, 2018).

El sistema de partidos uruguayo comenzó a realinearse programáticamente hacia fines de la década de los 60 del siglo XX. Esto fue el resultado del declive del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y de la incapacidad de los dos partidos tradicionales (Partido Colorado [PC] y Partido Nacional [PN]) para adaptarse a los cambios sociales y económicos, y de la incorporación gradual de un tercer actor, el Frente Amplio (FA), un partido de centroizquierda.

Luego del régimen autoritario y tras la restauración democrática en 1985, la contienda bipartidista entre el PC y el PN se tornó de forma gradual en una competencia entre bloques, uno compuesto por los partidos tradicionales en la centroderecha, y el otro, en la centroizquierda, compuesto por el FA (Buquet y Piñeiro, 2014). Este proceso de realineamiento se intensificó en la década de los noventa y principios de los años 2000, con las reformas estructurales y de mercado que llevaron adelante los gobiernos del PN (1990-1995) y del PC (1995-2000 y 2000-2005) (Bulmer-Thomas, 2013; Morley *et al.*, 1999). El FA, junto con el movimiento sindical, recurrió a los mecanismos de democracia directa y a la movilización social para oponerse a las reformas (Altman, 2010; Monestier, 2011; Moreira, 2004). De esta forma, el FA capitalizó el descontento social y la oposición de diversos sectores sociales organizados frente a las reformas promercado impulsadas por los gobiernos del PN y el PC. Al hacerlo, el FA fortaleció su conexión con estos actores sociales.

En 2005, el FA asumió el gobierno por primera vez, en un momento en que el país estaba recién empezando a salir de su peor crisis financiera y económica (Rosenblatt, 2006). El FA tenía el desafío de asegurar la estabilidad económica y promover reformas estructurales que revitalizaran el papel del Estado. Las reformas implementadas promovieron la redistribución de los ingresos y la construcción de una matriz de protección con rasgos universalistas (Huber y Stephens, 2012; Pribble, 2013; Padrón y Wachendorfer, 2017a), entre las que destaca el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que cubrió a sectores antes no comprendidos.

Durante los gobiernos del FA, el gasto social se incrementó significativamente (Caetano y De Armas, 2011). Se reinstalaron las negociaciones colectivas de salarios a nivel sectorial, las que además se expandieron para incluir a sectores previamente no considerados (trabajadores rurales y trabajadoras domésticas) (Etchemendy, 2019; Senatore y Méndez, 2011). Por último, el FA promovió una extensa y radical agenda de derechos que eran demandas históricas de diferentes movimientos sociales. Entre estas, se destacan la ley de aborto legal, la ley de matrimonio igualitario, la ley que extendió los derechos a las personas trans y la ley que permitió el autocultivo y comercialización del cannabis (Bidegain Ponte, 2013).

Uno de los rasgos más importantes que se observan en el caso uruguayo, especialmente en el FA, es la conexión orgánica entre el partido y los sectores sociales organizados (Anria *et al.*, 2022). Así es como se explican las posiciones del partido y las reformas impulsadas durante los tres gobiernos del FA (2005-2020), algunas de las cuales no estaban alineadas con las preferencias de los dirigentes del partido (por ejemplo, la negativa firmar el TLC con Estados Unidos o el aborto legal) o del votante mediano (por ejemplo, la ley trans).

En particular, las reformas laborales de los gobiernos del FA ilustran el efecto de la conexión orgánica. Mediante vínculos informales de doble pertenencia al movimiento sindical y al partido, se aprobaron más de 40 proyectos de ley sobre derechos de los trabajadores. Entre estos proyectos de ley, se destacó la legislación sobre derechos colectivos como, por ejemplo, la reinstauración y ampliación de la negociación tripartita de los salarios. Estas políticas conllevaron un aumento en los salarios reales, en la formalización de trabajadores y en el empoderamiento del movimiento sindical derivado del aumento de las tasas de sindicalización, especialmente en el sector privado (Blofield, 2012; Etchemendy, 2019; Padrón y Wachendorfer ,2017b; Senatore y Méndez, 2011).

Si bien Uruguay es un caso de incorporación política, no está exento de desafíos. Por un lado, la capacidad de agregación debe entenderse como un desafío permanente, es decir, la incorporación alcanzada puede perderse, porque los agentes políticos pierden conexión con los sectores sociales o porque estos pierden capacidad de organización y representación de intereses. Además, la política enfrenta el desafío de conectar con los trabajadores informales, quienes, aunque han disminuido en proporción desde mediados de los años 2000, siguen representando una parte relevante de la economía.

Conclusiones

A pesar de los avances en inclusión social en las últimas décadas en América Latina, diferentes países de la región experimentaron olas de protestas que en varios casos fueron inorgánicas y cuestionaron la legitimidad de los sistemas políticos. La expansión de las políticas sociales y las de reconocimiento de minorías y de apertura de canales institucionales de participación sectorial no es una condición suficiente para asegurar la legitimidad del proceso político en las democracias contemporáneas. Estas crisis generalizadas del orden democrático son crisis de incorporación política. En este documento, conceptualizamos y medimos la incorporación política como forma de identificar los mecanismos que permiten que la legitimidad persista en el tiempo, independientemente de las condiciones sociales y económicas coyunturales.

Los avances en inclusión han favorecido la segmentación de la representación política. En ausencia de agentes capaces de unificar demandas e intereses para representar a estos sectores en el conjunto del proceso político, esta segmentación dificulta que la ciudadanía lo perciba como legítimo. La debilidad de las organizaciones sociales y de los partidos para integrar demandas segmentadas, hace que los sistemas políticos sean más vulnerables y menos resilientes ante crisis de desempeño de los gobiernos.

La resiliencia de las democracias es producto de la legitimidad de sus instituciones (procesos y organizaciones), en particular, de su capacidad para incorporar intereses y demandas de forma permanente. La incorporación política supone el ejercicio colectivo de los derechos políticos a través de organizaciones sociales y partidos que aseguren a los sectores desfavorecidos incidencia en la política. La incorporación política es un proceso continuo que aumenta la resiliencia de los sistemas políticos porque otorga legitimidad a la toma de decisiones políticas. La incorporación política requiere que todos los sectores relevantes de la sociedad cuenten con actores sociales organizados con vínculos permanentes con los partidos políticos.

En este trabajo, hemos discutido el concepto de incorporación política con un enfoque especial para el contexto latinoamericano y hemos desarrollado un concepto y un índice que sirven para analizar y evaluar los riesgos y desafíos al orden democrático. Nuestro índice muestra que en América Latina existen bajos niveles de incorporación política que se explican tanto por la debilidad de la sociedad organizada como por la precariedad de los vínculos que los partidos construyen con ella. Sin embargo, los diferentes casos latinoamericanos muestran variación. Países como Uruguay y Brasil presentan niveles superiores a la media de la región.

Más allá de condicionantes regionales comunes, estos casos sugieren que existen márgenes para avanzar en los procesos de incorporación política. La acción en estos márgenes supone:

Mejorar las condiciones para la acción colectiva de la sociedad, en particular de sectores subalternos. Por un lado, esto implica apoyar materialmente y con capacitación a las organizaciones de estos sectores. Por otro, trabajar sobre las condiciones de libertad efectiva para el ejercicio individual de la participación (ausencia de violencias y de mecanismos de dominación o control que limiten la participación individual).

Fomentar la coordinación nacional de las organizaciones sociales para que puedan ser actores en la política nacional e interactuar con otras organizaciones, con los partidos políticos y con el Estado.

Estimular el desarrollo de vínculos entre partidos y organizaciones sociales con base en coincidencias programáticas y de valores. Esto supone desarrollar relaciones de largo plazo entre dirigentes y también lazos a nivel local entre activistas de partidos y de organizaciones sociales. El desarrollo de estos vínculos de largo plazo entre partidos y organizaciones sociales más allá de coincidencias programáticas y de enfoque sobre la política y las políticas no puede significar la pérdida de autonomía para la toma de decisiones de unos y otros.

Bibliografía

Abitbol, P. (2019). ¿Por qué protestan en Colombia? Movilizaciones, reclamos de paz y crisis de la derecha. Nueva Sociedad. www.nuso.org/articulo/por-que-protestan-en-colombia.

Altman, D. (2010). Direct Democracy Worldwide. New York: Cambridge University Press.

Anria, S., Pérez Bentancur, V., Piñeiro Rodríguez, R. y Rosenblatt, F. (2022). Agents of Representation: The Organic Connection between Society and Leftist Parties in Bolivia and Uruguay. Politics & Society, 50(3), 384-412.

Arza, C., Castiglioni, R., Martínez Franzoni, J., Niedzwiecki, S., Pribble, J. y Sánchez-Ancochea, D. (2022). The Political Economy of Segmented Expansion: Latin American Social Policy in the 2000s. New York: Cambridge University Press.

Bartels, L. M. (2016). Unequal Democracy. The Political Economy of the New Gilded Age. Princeton: Princeton University Press.

Bates, R. H. (1981). Market and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies. Berkeley: University of California Press.

Benza, G. y Kessler, G. (2020). Uneven Trajectories: Latin American Societies in the Twenty-First Century. New York: Cambridge University Press.

Bidegain Ponte, G. (2013). Uruguay: ¿El Año Bisagra? Revista de Ciencia Política 33(1), 351-374.

Bidegain Ponte, G. (2015). Autonomización de los movimientos sociales e intensificación de la protesta: estudiantes y mapuches en Chile (1990-2013) [Tesis de doctorado, Pontificia Universidad Católica de Chile].

Blofield, M. (2012). Care Work and Class: Domestic Workers' Struggle for Equal Rights in Latin America. University Park: The Pennsylvania State University Press.

Bulmer-Thomas, V. (2013). The Economic History of Latin America Since Independence. Third ed. New York: Cambridge University Press.

Buquet, D. y Piñeiro, R. (2014). La Consolidación de un Nuevo Sistema de Partidos en Uruguay. Revista Debates 8(1), 127-148.

Caetano, G. y De Armas, G. (2011). Diez Años del Informe de Coyuntura. Del Uruguay de la crisis a las posibilidades y exigencias de desarrollo. En G. Caetano, M. E. Mancebo y J. A. Moraes (Eds.), Política en tiempos de Mujica. En busca del rumbo. Informe de coyuntura N° 10, (pp. 11-41). Montevideo: Estuario Editora.

Castiglioni, R. (2019). ¿El ocaso del "modelo chileno"? Nueva Sociedad 284, 4-14.

Castiglioni, R. y Rovira Kaltwasser, C. (2016). Challenges to Political Representation in Contemporary Chile. Journal of Politics in Latin America 8 (3), 3-24.

Collier, D. y Levitsky, S. (1997). Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research. World Politics 49(3), 430-451.

Collier, R. (2018). Labor Unions in Latin America Incorporation and Reincorporation under the New Left. In E. Silva y F. Rossi (Eds.), Reshaping the Political Arena in Latin America (115-128). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Collier, R. y Handlin, S. (2009). Reorganizing Popular Politics: Participation and the New Interest Regime in Latin America. University Park: The Penn State University Press.

Collier, R., y Collier, D. (1991). Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton University Press.

Conaghan, C. (2018). From Movements to Governments. Comparing Bolivia's MAS and Ecuador's PAIS. In E. Silva y F. Rossi (Eds.), Reshaping the Political Arena in Latin America (222-250). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Coppedge, M., Gerring, J, Knutsen, K. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., Angiolillo, F., Bernhard, M., Borella, C., Cornell, A., Fish, M. S., Fox, L., Gastaldi, L., Gjerlow, H., Glynn, A., Good God, A., Grahn, S., Hicken, A., Kinzelbach, K., ... Ziblatt, D. (2024a). V-Dem Codebook v14. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. v-dem.net/documents/38/V-Dem_Codebook_v14.pdf

Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H, Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., Angiolillo, F., Bernhard, M., Borella, C., Cornell, A., Fish, M. S., Fox, L., Gastaldi, L., Gjerlow, H., Glynn, A., Good God, A., Grahn, S., Hicken, A., Kinzelbach, K., ... Ziblatt, D. (2024b). V-Dem [Country-Year/Country-Date] Dataset v14. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. www.v-dem.net/data/dataset-archive

Donoso, S. y Von Bülow, M. eds. (2017). Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences. New York: Palgrave Macmillan.

Etchemendy, S. (2011). Models of Economic Liberalization: Business, Workers, and Compensation in Latin America, Spain, and Portugal. New York: Cambridge University Press.

---. (2019). The Rise of Segmented Neo-Corporatism in South America: Wage Coordination in Argentina and Uruguay (2005-2015). Comparative Political Studies 52(10), 1427-1465.

Garay, C. (2016). Social Policy Expansion in Latin America. New York: Cambridge University Press.

Gilens, M. (2012). Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America. Princeton: Princeton University Press.

Handlin, S. (2013). Social protection and the politicization of class cleavages during Latin America's Left turn. Comparative Political Studies 46(12), 1582-1609.

Huber, E. y Stephens, J. D. eds. (2012). Democracy and the Left: Social Policy and Inequality in Latin America. Chicago: University of Chicago Press.

Huntington, S. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.

Kapiszewski, D., Levitsky, S. y Yashar, D. J. (2021a). Inequality, Democracy, and the Inclusionary Turn in Latin America. En D. Kapiszewski, S. Levitsky y D. Yashar (Eds.), The Inclusionary Turn in Latin American Democracies (pp. 1-50). New York: Cambridge University Press.

Kapiszewski, D., Levitsky, S. y Yashar, D. J. (2021b). The Inclusionary Turn in Latin American Democracies. New York: Cambridge University Press.

Lanzaro, J. (Ed.) (2000). La "Segunda" transición en el Uruguay: Gobierno y partidos en un tiempo de reforma. Montevideo: Instituto de Ciencia Política – Fundación de Cultura Universitaria.

Luna, J. P. (2014). Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Luna, J. P. y Altman, D. (2011). Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Latin American Politics & Society 53(2), 1-28.

Luna, J. P., Piñeiro Rodríguez, R., Rosenblatt, F. y Vommaro, G. (2021). Political Parties, Diminished Subtypes, and Democracy. Party Politics 27(2), 294-307.

Luna, J. P., y Rosenblatt, F. (2012). ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. En F. J. Díaz, L. Sierra (Eds.), Democracia con partidos. Informe para la reforma de los partidos políticos en Chile (pp. 115-268). Santiago, Chile: CEP-CIEPLAN.

---. (2017). Las Organizaciones Partidarias Antes y Después de 1973. En J. P. Luna y R. Mardones (Eds.), La Columna vertebral Fracturada: Revisitando intermediarios políticos en Chile (pp. 33-56). Santiago: PUC/RIL editores.

Mainwaring, S. y Scully, T. eds. (2010). Democratic Governance in Latin America. Stanford: Stanford University Press.

Mainwaring, S., ed. (2018). Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse. New York: Cambridge University Press.

Medel Sierralta, R. (2017). Alliances et autonomie politique: Les deux faces du syndicalisme Chilien. Cahiers des Amériques latines 86, 49-69.

Medel, R., Somma, N. y Donoso, S. (2023). The Nexus between Protest and Electoral Participation: Explaining Chile's Exceptionalism. Journal of Latin American Studies, 1-28.

---. (2021). La CUT y los clivajes sindicales en Chile. Entre la pretensión transformadora y la estrategia defensiva. CUHSO (Temuco) 31, 176-199.

Meléndez, C., and Rovira Kaltwasser, C. (2019). Political Identities: The Missing Link in the Study of Populism. Party Politics 25(4), 520-533.

Monestier, F. (2011). Movimientos sociales, partidos políticos y democracia directa desde abajo en Uruguay: 1985-2004. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Moreira, C. (2004). Final de Juego: Del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay. Montevideo: Ediciones Trilce.

Morley, S. A., Machado, R. y Pettinato, S. (1999). Indexes of Structural Reform in Latin America. Serie Reformas Económicas-ECLAC Economic Development Division (12).

Nevache, C. (2024). Panamá: desarticulación del sistema de partidos en medio de movilizaciones históricas. Revista de Ciencia Política 44(2).

Nocetto, L., Pérez-Bentancur, V., Piñeiro-Rodríguez, R. y Rosenblatt, F. (2024). Unorganized Politics: The Political Aftermath of Social Unrest in Chile. Comparative Politics. doi.org/10.5129/001041524X17090751963915

Nunes, F. y Melo, C. R. (2017). Impeachment, Political Crisis and Democracy in Brazil. Revista de Ciencia Política 37(2), 281-304.

Olivares, A. y Medina, P. (2020). La persistente debilidad institucional de Ecuador: Protestas, elecciones y divisiones políticas durante el 2019. Revista de Ciencia Política 40(2), 315-349.

Padrón, A. y Wachendorfer, A. (2017a). Uruguay: Caminos hacia la construcción de Poder Sindical. Nueva sociedad octubre (272), 62-82.

Padrón, A. y Wachendorfer, A. (2017b). Trade Unions in Transformation Uruguay: Building Trade Union Power. Friedrich-Ebert Stiftung (Berlin).

Palacios-Valladares, I. (2020). Chile 2019: Las protestas de octubre y el movimiento estudiantil ¿coyuntura histórica de cambio? Revista de Ciencia Política 40(2), 215-234. ojs.uc.cl/index.php/rcp/article/view/20403

Pérez Bentancur, V., Piñeiro Rodríguez, R. y Rosenblatt, F. (2020). How Party Activism Survives. Uruguay's Frente Amplio. New York: Cambridge University Press.

Piñeiro Rodríguez, R. y Rosenblatt, F. (2020). Stability and Incorporation: Toward a New Concept of Party System Institutionalization. Party Politics 26(2), 249-260.

PNUD. (2024). Informe de Desarrollo Humano en Chile ¿Por qué nos cuesta cambiar?: Conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible. Santiago: PNUD.

Pribble, J. (2013). Welfare and Party Politics in Latin America. New York: Cambridge University Press.

Przeworski, A. (2010). Democracy and the Limits of Self-Government. New York: Cambridge University Press.

Ramírez Gallegos, F. ed. (2020). Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador. Buenos Aires: CLACSO.

Roberts, K. (1998). Deepening Democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru. Stanford: Stanford University Press.

---. (2002). Social Inequalities Without Class Cleavages in Latin America's Neoliberal Era. Studies in Comparative International Development 1(36), 3-33.

---. (2014). Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era. New York: Cambridge University Press.

Rosenblatt, F. (2006). El dispar desenlace de la crisis económica en Argentina y Uruguay (2001-2002): Una explicación desde la teoría de las prospectivas. Revista de Ciencia Política 26(2), 97-119.

---. (2018). Party Vibrancy and Democracy in Latin America. New York: Oxford University Press.

Rossi, F. (2017). The Poor's Struggle for Political Incorporation: the Piquetero Movement in Argentina. New York: Cambridge University Press.

Rossi, F. y Silva, E. (2018). Introduction. Reshaping the Political Arena in Latin America. En E. Silva y F. Rossi (Eds.), Reshaping the Political Arena in Latin America (3-20). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Schlozman, K. L., Brady, H. y Verba, S. (2018). Unequal and Unrepresented: Political Inequality and the People's Voice in the New Gilded Age. Princeton: Princeton University Press.

Schwartz, R. (2024). Guatemala 2023: Del fortalecimiento autoritario al resurgimiento democrático. Revista de Ciencia Política 44(2).

Senatore, L. y Méndez, G. (2011). La Política salarial en el bienio 2010-2011. En G. Caetano, M. E. Mancebo y J. A. Moraes (Eds.), política en tiempos de Mujica. En busca del rumbo. Informe de coyuntura N° 10 (pp. 113-123). Montevideo: Estuario Editora.

Silva, E. (2017). Reorganizing Popular Sector Incorporation: Propositions from Bolivia, Ecuador, and Venezuela. Politics & Society 45(1), 91-122.

Somma, N. (2012). The Chilean Student Movement of 2011-2012: Challenging the Marketization of Education. Interface: A Journal for and About Social Movements 4(2), 296-309.

Somma, N. y Medel, R. (2017). Shifting Relationships Between Social Movements and Institutional Politics. En S. Donoso y M. von Bülow (Eds.), Social Movements in Chile (29-61). Palgrave Macmillan: Nueva York.

Somma, N., Bargsted, M., Disi Pavlic, R. y Medel, R. (2021). No Water in the Oasis: the Chilean Spring of 2019-2020. Social Movement Studies 20(4), 495-502.

Somma, N., Garretón, M., Campos, T. y Joignant, A. (2020). Radiografía del "Estallido Social". En A. Joignant, M. Garretón, N. Somma y T. Campos (Eds.), Informe Anual. Observatorio de Conflictos 2020 (pp. 11-21). Santiago: COES. Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social.

Taylor-Robinson, M. M. (2010). Do the Poor Count?: Democratic Institutions and Accountability in a Context of Poverty. University Park: Pennsylvania State University Press.

UNDP. (1993). Human Development Report 1993. Oxford: Oxford University Press.

UNDP. (2010). Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. San José, Costa Rica: United Nations.

---. (2024). Human Development Report 2023–2024: Breaking the Gridlock. Reimagining Cooperation in a Polarized World. New York: United Nations Development Program.

Weyland, K. (1997). "Growth With Equity' in Chile's New Democracy? Latin American Research Review 32, no. 1, 37-68.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. New York: Cambridge University Press.

Yashar, D. (2005). Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge: Cambridge University Press.

Anexo 1. Lista de expertos que respondieron la encuesta sobre incorporación política

Experto	País
Philip Kitzberger	Argentina
Francisco Longa	Argentina
Experto Argentina 3	Argentina
Sebastián Etchemendy	Argentina
Experto Bolivia 1	Bolivia
Santiago Anria	Bolivia
Talita Sao Thiago Tanscheit	Brasil
Sergio Toro	Chile
Experto Chile 2	Chile
Sofía Donoso	Chile
Rodolfo Disi-Pavlic	Chile
Nicolás Somma	Chile
Laura Wills-Otero	Colombia
María José Álvarez	Colombia
Mateo Villamizar	Colombia
Experto Costa Rica 1	Costa Rica
Experto Costa Rica 2	Costa Rica
Ronald Alfaro	Costa Rica
Fabio Resmini	Ecuador
Santiago Basabe	Ecuador
Roody Reserve	El Salvador
Experto Guatemala 1	Guatemala
Omar Sánchez-Siboni	Guatemala
Cecilia Rodríguez	Honduras
Experto Honduras 2	Honduras
Experto México 1	México
Salvador Martí i Puig	Nicaragua
Orlando Pérez	Panamá
Claire Nevache	Panamá
Guzmán Ibarra	Paraguay
Paula Muñoz	Perú
Experto Perú 2	Perú
Ana Belén Benito Sánchez	República Dominicana
Experto Uruguay 1	Uruguay
Felipe Monestier	Uruguay
Experto Uruguay 3	Uruguay
Adriana Boersner	Venezuela
Experto Venezuela 2	Venezuela

Informe Regional de Desarrollo Humano 2025 Background Papers

No. 41 UNDP LAC Working Paper Series
Resilient Human Development: Advancing Human Development amidst Shocks and Crises
Sabina Alkire

No. 42 UNDP LAC Working Paper Series
Understanding the Challenge of Resilience and Mental Health in Latin America and the Caribbean
Edgar Valle

No. 43 UNDP LAC Working Paper Series
From a Resource-Intensive to a Symbiotic Tech
Amir Lebdioui, Angel Melguizo and Victor Muñoz

No. 44 UNDP LAC Working Paper Series
Diversification of Employment in Latin America and the Caribbean: Gig Employment and Implications for Economic Resilience
Mariana Viollaz

No. 45 UNDP LAC Working Paper Series
Gender Bias in AI: Risks and Opportunities for Latin America and the Caribbean
Gemma Galdon-Clavell

No. 46 UNDP LAC Working Paper Series
What Do We Know about Organized Crime in Latin America and the Caribbean? Trends, Definitions, and Risks for Democracy
Lucía Dammert and Carolina Sampó

No. 47 UNDP LAC Working Paper Series
Redefining Socio-Natural Resilience within the Human Development Framework: Disaster, Risk and Resilience in Latin America and the Caribbean
Allan Lavell

No. 48 UNDP LAC Working Paper Series
Sharing Risks beyond Social Insurance in Latin America and the Caribbean
Matías Morales Cerda

No. 49 UNDP LAC Working Paper Series
Retratos de la Resiliencia en el campo: Investigación cualitativa sobre riesgo, resiliencia y desarrollo
Azucena Cháidez

No. 50 UNDP LAC Working Paper Series
Human Mobility, Resilience and Development in Latin America and the Caribbean
David Khoudour

No. 51 UNDP LAC Working Paper Series
Unequal Assets, Uneven Resilience: Mapping Poverty Quadrants and Opportunities
Salome Ecker, Sandra Martínez-Aguilar and Eduardo Ortiz-Juárez

No. 52 UNDP LAC Working Paper Series
Resilient Human Development in Latin America and the Caribbean
Carol Watson

No. 53 UNDP LAC Working Paper Series
Fragmented Societies in Latin America and the Caribbean
Santiago Rodríguez-Solórzano

No. 54 UNDP LAC Working Paper Series
Riesgos Emergentes: Empleo en plataformas digitales. Perspectivas sobre la informalidad y nuevas formas de informalidad ante el auge de la economía digital y el trabajo por plataformas, Caso Guatemala
Elías Miguel Ahuat and Juan Roberto Hernández

No. 55 UNDP LAC Working Paper Series
Desafíos de la incorporación política, estabilidad y resiliencia democrática en América Latina
Verónica Perez-Betancur, Rafael Piñeiro-Rodríguez and Fernando Rosenblatt

No. 56 UNDP LAC Working Paper Series
Estudio sobre las implicancias de las sequías en Uruguay desde una perspectiva de desarrollo humano y resiliencia
Valentín Balderrín and Sabrina Rodríguez

No. 57 UNDP LAC Working Paper Series
Cómo la extorsión mina la gobernabilidad democrática un Estudio de dos casos en el departamento de la Libertad
Noam López Villanes

No. 58 UNDP LAC Working Paper Series
Nearshoring: Anticipando riesgos para aprovechar oportunidades
Maite García de Alba, Cynthia Martínez and Jesús Pacheco

No. 59 UNDP LAC Working Paper Series
Desarrollo Humano Resiliente frente a choques Ambientales: Aprovechar las transiciones y nuevas tendencias para la sostenibilidad en la República Dominicana
Sócrates Barinas Guerrero

No. 60 UNDP LAC Working Paper Series
Percepción de riesgos climáticos y resiliencia ambiental: Un análisis de la opinión pública en Argentina
Gabriela Catterberg, Patricio Yamin, and Maria Veronica Moreno

No. 61 UNDP LAC Working Paper Series
The Roots of Resilience: Towards Reparatory Approaches to Development
Kishan Khoday

No. 62 UNDP LAC Working Paper Series
Impacto de la degradación de los ecosistemas y del cambio climático en asentamientos humanos de la Costa Sur de Cuba
Marta Rosa Muñoz Campos, Arianna Rodríguez García, Dariadna Barrios Tabares, and Leyner Javier Ortiz Betancourt

No. 63 UNDP LAC Working Paper Series
Impacto y respuesta ante incendios forestales en Chile: El caso de Viña del Mar de 2022 Y 2024
Javiera Troncoso and Rocio Berwart

No. 64 UNDP LAC Working Paper Series
La salud mental en la población adulta salvadoreña. Un riesgo emergente en un contexto de envejecimiento poblacional y crisis de los cuidadoso
María José Erazo and Carolina Molina

www.undp.org/latin-america

With the generous support of the Spanish Cooperation

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

aecid

Spanish Cooperation

www.facebook.com/pnudlac

www.instagram.com/pnudlac

www.linkedin.com/company/pnudlac

www.youtube.com/PNUDLAC

x.com/PNUDLAC